



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0140/2017

FECHA: 17 de octubre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0140/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente Reclamación pueden sistematizarse como sigue.
 - Mediante escritos registrados el 16 de octubre de 2016 en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el ahora reclamante, tras poner de manifiesto que con la desaparición de la Cámara Local de Villarejo Sobrehuerta y la incorporación del patrimonio y la documentación a la Cámara Provincial de Cuenca al tener atribuida dicha Consejería la tutela administrativa y económica de esa Corporación, según el artículo 5.t) del Decreto 133/2005 de estructura orgánica y competencial de la precitada Consejería, solicitaba, por una parte, "información sobre el destino de los fondos recaudados en las subastas de la Masa Común y las obras realizadas por la Cámara Provincial de Cuenca desde 1998, año por el que se atribuye a esta Corporación el patrimonio de la extinguida Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta (Cuenca)" y, por otra parte, "tener acceso al libro de actas de la extinta

ctbg@consejodetransparencia.es



Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta (Cuenca) correspondiente a los años 1985 y 1986”.

Por escrito de 3 de noviembre de la Secretaria General de la Consejería de referencia se traslada al ahora reclamante que, en ambos casos, se carece de la información pretendida, remitiéndole a las oficinas y dependencias de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca.

- A través de un correo electrónico dirigido al Secretario de la Cámara Provincial de Cuenca el pasado 31 de marzo de 2017, el ahora reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, solicita la siguiente información:
 - “Solicito tener acceso al libro de Actas de la extinta Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta (Cuenca), correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988.
 - También les solicito me informen por el destino de los Fondos recaudados en las Subastas de la Masa Común y obras realizadas por la Cámara Agraria Provincial desde 1988 en el término municipal de Villarejo Sobrehuerta”.
 - En la misma fecha y por idéntica vía de comunicación, el ahora reclamante remite un escrito al Ayuntamiento de Torerrejoncillo del Rey -Cuenca- en el que, al amparo de la LTAIBG solicita “ser informado del destino y fines de los fondos recaudados en las subastas de la Masa Común por la Cámara Provincial de Cuenca, desde 1998, año por la que se atribuye a esta Corporación del patrimonio de la extinguida Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta (Cuenca)”.
 - Al no haber obtenido contestación a las solicitudes de referencia, mediante escrito registrado en esta Institución el 8 de mayo de 2017 el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.
2. Mediante escrito de 10 de mayo de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente, por una parte, al Director de la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey y al Secretario de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca, a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Por escrito de 29 de mayo de 2017 del Secretario General del Ayuntamiento de referencia se traslada Informe de alegaciones relacionado con la reclamación presentada en el que, en breve síntesis, se pone de manifiesto lo siguiente:

- Como consecuencia de una solicitud de información planteada por el ahora reclamante el 7 de Octubre de 2015 acerca del destino y fines de la recaudación de las subastas de las parcelas realizadas por la Cámara Agraria



Provincial de Cuenca desde 1998, por el Ayuntamiento se dirigió un escrito el siguiente 19 de octubre a la indicada Cámara solicitando información sobre cantidades recaudadas en cada uno de los núcleos de población que integran este municipio así como de los importes abonados en pro del mismo por obras que hubieran ejecutado a solicitud de esta entidad. El posterior 26 de noviembre de 2015 se recibió contestación de la reiterada Cámara Agraria comunicando a este Ayuntamiento que para cualquier asunto relacionado con el patrimonio de la Cámara habría que dirigirse a la Fundación Cuenca Agraria.

- Por escrito de 31 de marzo de 2016 dirigido a la Cámara Agraria Provincial se solicita la identidad de los adjudicatarios de cada una de las tierras de la masa común, resultantes de la última subasta celebrada al efecto y precio de adjudicación y el saldo disponible en cada uno de los núcleos de población del municipio, así como la forma de dispone este Ayuntamiento de dicho saldo para invertirlo en ellos. El siguiente 15 de abril se recibe en el Ayuntamiento contestación de la Cámara Agraria en el que indica que cualquier cuestión relacionada con el patrimonio habría de dirigirse a la Fundación Cuenca Agraria. .
- Después de haber mantenido diferentes comunicaciones con la Fundación Cuenca Agraria, y tras el traslado de información relativa a que los fondos disponibles para actividades realizadas en beneficio de los Agricultores de la localidad en dicha Fundación ascienden a 4.505,00 euros, ante la solicitud municipal de que se aclare indique si dicha cantidad corresponde a todas las entidades de población que integran el municipio -6- o si solo corresponde a una, la Cámara Agraria Provincial de Cuenca remitió el 22 de septiembre de 2016 una nota informativa en la que se pone de manifiesto que a los Ayuntamientos, en virtud de la Ley 1/1996, de 27 de Junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha les corresponden las siguientes funciones en esta materia:
 - El Patrimonio de las extinguidas Cámaras Locales es propiedad de la Cámara Agraria Provincial y la gestión del mismo es responsabilidad dicha Cámara.
 - Que los Ayuntamientos son considerados meros colaboradores de la Cámara Agraria Provincial, una colaboración que podrá o no ser aceptada; en ningún caso, obligatoria.
 - Que la gestión y administración de los recursos y patrimonio de la Cámara Agraria Provincial, son competencia exclusiva de la misma, no ostentando los ayuntamientos competencia ni derecho alguno, concluyendo que los Ayuntamientos podrán solicitar, nunca exigir, la colaboración de dicha Cámara, para realizar obras o programas de interés general agrario en el territorio de su competencia, indicando el procedimiento a seguir para solicitar dicha colaboración.
- Tras recibir un correo electrónico del ahora reclamante de fecha 31 de marzo de 2017 en virtud del cual se solicita nuevamente ser informado de los fondos recaudados en las subastas de la Masa Común por la Cámara Agraria Provincial de Cuenca, desde 1998, el siguiente 17 de mayo de 2017 se remitió un nuevo correo a la citada Fundación en el que se traslada la



necesidad de que comuniquen a este Ayuntamiento los fondos disponibles procedentes de las subastas de las parcelas de la masa común ubicadas en cada una de las entidades de población del municipio, y en especial las ubicadas en Villarejo Sobrehuerta, y cantidad gastada en esa población.

- El 19 de mayo se recibió una copia de la nota informativa que se ya se había remitido por la Cámara Agraria el anterior 22 de septiembre de 2016, así como copia de las dos transferencias realizadas con cargo a fondos de Villarejo Sobrehuerta.
- En consecuencia de todo lo anterior, teniendo en cuenta la nota informativa referenciada –concluye su escrito de alegaciones el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey-, puede considerarse:
 - a) Que el patrimonio de las extinguidas Cámaras Agrarias Locales es de la Cámara Agraria Provincial.
 - b) Que su gestión y administración así como la de los recursos económicos, es responsabilidad y competencia exclusiva de la Cámara Agraria Provincial.
 - c) Que no ostentando el Ayuntamiento competencia ni derecho alguno al respecto, ni disponiendo de los datos solicitados, no es posible proporcionarle la información pretendida por D. José Delgado Pastor.

Por otra parte, en la fecha en la que se dicta la presente Resolución no se ha recibido en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegación alguna procedente de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca sobre el expediente de referencia.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las



Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en determinar el objeto de la presente resolución y el sujeto que dispone de ella. Estos es, cuál es la información que se ha solicitado y no se ha obtenido por el ahora reclamante y quién puede disponer de ella.

Con relación a la primera cuestión, a tenor de los datos obrantes en el expediente reseñados en los antecedentes de esta Resolución, el objeto de la originaria solicitud de acceso a la información de la que trae causa es doble: por una parte, se pretende tener acceso al libro de actas de la extinta Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988, mientras que, por otra parte, se solicita información sobre el destino de los Fondos recaudados en las Subastas de la Masa Común y obras realizadas por la Cámara Agraria Provincial desde 1988 en el término municipal de Villarejo Sobrehuerta.

En lo que respecta a la segunda cuestión planteada, de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente, el ahora reclamante ha solicitado la información de referencia, consecutivamente, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y desarrollo Rural, Al Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey y a la Cámara Agraria Provincial de Cuenca. Los dos primeros han en diferentes momentos han indicado que carecen de la información solicitada debiendo acudir el interesado a la Cámara Agraria provincial de Cuenca, circunstancia que nos conduce a examinar el marco jurídico general de las Cámaras Agrarias.

4. En desarrollo del artículo 52 de la Constitución, el legislador estatal aprobó la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. Con posterioridad, y tras efectuarse el correspondiente traspaso de competencias por Real Decreto 327/1996, de 23 de



febrero, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aprobó la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha. Finalmente, la precitada ley 23/1986, de 24 de diciembre, es derogada por la Ley 18/2005, de 30 de septiembre que implica, según se desprende de su Exposición de Motivos, que la “Ley de derogación se dirige a eliminar la regulación estatal, pero no implica la supresión de las Cámaras”.

Según se desprende del artículo 1 de la Ley 1/1996, de 27 de junio de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha, en cada una de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma existirá una Cámara Agraria de ámbito provincial, calificadas como Corporaciones de Derecho Público, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que actúan como órganos de consulta y colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha en ,materia agraria, a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.

Por su parte, en la Disposición adicional primera de la Ley 1/1996, de 27 de junio, se declara la extinción de las Cámaras Agrarias de ámbito inferior al provincial existentes en la Comunidad de Castilla-La Mancha tras la entrada en vigor de la misma. Este es el caso del supuesto que ahora nos ocupa, en el que queda extinguida la Cámara Local de Villarejo Sobrehuerta. A mayor abundamiento, la Disposición adicional segunda de la precitada Ley 1/1996 aborda la regulación del régimen jurídico de la integración de las Cámaras de ámbito inferior al provincial en cada una de las Cámaras Agrarias constituidas en cada provincia de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el objeto de la originaria solicitud de información y de lo expuesto hasta ahora, en conclusión, cabe sostener que la información solicitada obrará en poder de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca en tanto y cuanto, por una parte, es la Corporación que lleva a cabo las subastas de la Masa Común y, por otra parte, resulta sucesora de la extinguida Cámara Agraria Local de Villarejo Sobrehuerta de la que habrá recibido su patrimonio en los términos de la Disposición adicional segunda de la Ley 1/1996, de 27 de junio, entre el que se encontrarán los correspondientes Libros de Actas de aquella Cámara Local.

5. Toda vez que hemos precisado el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información y el sujeto que debería disponer de la misma se trata de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca, hay que recordar que el artículo 2.1.e) de la LTAIBG enumera entre las entidades incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación a las Corporaciones de Derecho Público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

Con relación a las Cámaras Agrarias, el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 de julio sostiene que, «nos hallamos ante entidades que no han sido fruto de la libre decisión u opción de los afectados, para la obtención de fines autónomamente elegidos, sino fundamentalmente (y sin excluir forzosamente este último aspecto), de una decisión de los poderes públicos, sin que exista por tanto un *pactum associationis* original, que se ve



sustituido por un acto de creación estatal; y tampoco habría una opción en favor de la persecución de fines o defensa de intereses libremente determinados, ya que el objeto de esas agrupaciones vendría definido por los intereses públicos para cuya defensa fueron creadas, y que son también fijados por el poder público. En el tipo de agrupaciones de que se trata -que han recibido la denominación genérica de Corporaciones públicas, con una mayor o menor amplitud- si bien cabe estimar la presencia de un cierto elemento o base asociativa (ya que sus integrantes no se encuentran sometidos a un régimen de tipo estatutario funcionarial, ni integrados en relaciones de jerarquía y subordinación, sino en posición de paridad), sólo en términos muy latos puede hablarse de que exista una asociación, en cuanto que ésta supone una agrupación libre para la obtención de fines, determinados, también libremente, por los miembros que la integran. Como consecuencia de ello, estas agrupaciones de tipo corporativo y de creación legal no pueden incardinarse (pese a contar con una "base asociativa" en el sentido señalado), sin profundas modulaciones, en el ámbito de los artículos 22 y 28 CE.»

Este carácter administrativo es resaltado por el propio Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 10 de la Sentencia acabada de mencionar, cuando señala que «[t]radicionalmente, y como herencia de las circunstancias en que aparecieron, las Corporaciones Públicas han presentado un aspecto o vertiente de tipo privado, centrado en la «consecución de fines privados, propios de los miembros que las integran» (STC 76/1983; fundamento jurídico 26), aspecto que coexistía, como se ha dicho, con una dimensión pública, en cuanto órgano de consulta y colaboración con la Administración del Estado (y tras la Constitución de 1978, de las Comunidades Autónomas). Pero, tratándose, como se vio, de entidades cuya constitución, régimen y funciones vienen configurados por el legislador, compete a éste determinar la presencia y extensión de las dimensiones privadas de su actuación. Si tal dimensión existe, quedará fuera de la potestad organizativa y reguladora del Estado, que habrá de limitarse al aspecto o dimensión administrativa de la Corporación de que se trate».

De manera que, por lo que respecta a las concretas funciones de naturaleza pública que corresponden a las Cámaras Agrarias, contempladas en el artículo 4 de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, considera el Tribunal Constitucional que dicho precepto «viene a establecer las funciones propias de las Cámaras, con ello el legislador hace uso de su libertad de configuración de estos entes corporativos, siguiendo la línea ya usual, como vimos, en nuestro Derecho. Y debe señalarse que, si bien se enumeran funciones eminentemente de carácter público de las Cámaras Agrarias (actúan como órganos consultivos y ejercen las funciones que en ellos delegue la Administración Pública), ello no excluye que puedan ejercer otras funciones, en virtud de su regulación estatutaria propia, o del desarrollo normativo que de la Ley efectúen las Comunidades Autónomas competentes. De hecho, la Ley, al configurarse como ley básica, a desarrollar por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, deja en manos de las Comunidades Autónomas la determinación de las funciones (dentro de los límites que la propia Ley establece) a desempeñar por las Cámaras Agrarias, aparte de las definidas como «propias» por su art. 4». En este sentido el artículo 4 de la Ley 1/1996, de 27



de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha aborda la regulación de las funciones las mismas, reproduciendo las funciones públicas de consulta y colaboración previstas en la legislación estatal.

6. En cuanto al fondo del asunto planteado, cabe partir de la premisa que en la Ley 19/2013 se reconoce el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, según proclama la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid de 18 de mayo de 2016, «al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia ese derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.»

De acuerdo con lo anterior, y por lo que respecta a la información objeto de la originaria solicitud que motiva la presente Resolución, cabe razonablemente sostener que se trata de "información pública" a los efectos de la LTAIBG en tanto y cuanto ha sido elaborada por un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia en el ejercicio de funciones públicas sujetas a Derecho Administrativo. En este sentido, cabe considerar la trascendencia de la función relacionada con los fondos recaudados por las subastas de la masa común y el posterior destino a obras de interés municipal, así como la elaboración de libros de actas de los órganos de gobierno de Corporaciones de Derecho Público sobre las que este Consejo, en este último caso, ya ha tenido ocasión de precisar que se trata de información pública elaborada en el ejercicio de funciones públicas -entre otras, en las Reclamaciones con números de referencia RT/0023/2016, de 17 de mayo y RT/0072/2016, de 3 de junio-, que sólo encuentra el límite derivado de la garantía de la protección de datos ex artículo 15 de la LTAIBG.

Por ello, corresponde, en definitiva, estimar la Reclamación planteada y declarar el derecho de acceso del reclamante a la información pública solicitada.





III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por [REDACTED] frente a la ausencia de contestación de su solicitud de 31 de marzo de 2017 dirigida a la Cámara Agraria provincial de Cuenca y, en consecuencia, declarar su derecho de acceso a la información solicitada.

SEGUNDO: INSTAR a la Cámara Agraria Provincial de Cuenca a que, en el plazo máximo de 15 días hábiles, remita al reclamante la información solicitada y no satisfecha y a que, en igual plazo traslade a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información remitida al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

